

**SALA CUARTA DE DECISIÓN LABORAL**  
Medellín, treinta (30) de junio de dos mil veintiuno (2021)

**SENTENCIA**

Magistrada Ponente: María Eugenia Gómez Velásquez

Proceso	: Ordinario de Segunda Instancia
Demandantes	: CARLOS ALBERTO TORO HENAO, RUBEN DARÍO CATAÑO ZAPATA, CARLOS EDWIN TERÁN RAMÍREZ, JOSÉ LIBARDO HINCAPIÉ OSPINA Y JOSÉ TEODORO GUTIÉRREZ CARMONA
Demandada	: EMPRESA DE TRANSPORTE MASIVO DEL VALLE DE ABURRA LIMITADA -METRO DE MEDELLÍN LIMITADA-
Radicado	: 05001-31-05-019-2016-01287-01
Providencia	: Sentencia
Temas y Subtemas	: Laboral individual –Cesantías retroactivas, indemnización moratoria-
Decisión	: Confirma decisión absolutoria
Sentencia No	: 169

En la fecha antes anotada el **TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN, SALA CUARTA DE DECISIÓN LABORAL**, conformada por los Magistrados **CARLOS ALBERTO LEBRÚN MORALES, NANCY GUTIÉRREZ SALAZAR y MARÍA EUGENIA GÓMEZ VELÁSQUEZ**, como ponente, profieren la siguiente decisión de fondo, previa deliberación, de conformidad con lo establecido en el Decreto Legislativo N° 806 del 4 de junio de 2020, *“Por el cual se adoptan medidas para implementar las tecnologías de la información y las comunicaciones en las actuaciones judiciales, agilizar los procesos judiciales y flexibilizar la atención a los usuarios del servicio de justicia, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica”*, que modificó el trámite en los procesos de la jurisdicción Laboral.

## **ANTECEDENTES**

### **Pretensiones:**

Se solicita ordenar a la empresa Metro de Medellín Ltda. la liquidación y pago de cesantías a los demandantes; la indemnización moratoria consagrada en el artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo; **indexación** de las condenas **y Costas del proceso**.

### **Hechos relevantes:**

Afirma el apoderado de la parte demandante que los demandantes, en calidad de trabajadores oficiales se encuentran laborando en la empresa Metro de Medellín Ltda. y están adscritos al sindicato de la misma. Manifiesta que la entidad demandada sin socializar las consecuencias legales, presionó a los trabajadores y les condujo colectivamente a cambiarse del régimen de cesantías de retroactividad al régimen de cesantías anualizado y para tal fin les ofreció una bonificación como incentivo, que era prohibido por la Ley, viciando con ello la libre voluntad de los trabajadores en el cambio de régimen.

Asegura que la demandada para conseguir su fin, amenazó a los trabajadores con el despido y cambio de condiciones laborales a quienes no aceptaran el cambio al régimen de cesantías anualizado, por lo cual se vieron obligados a presentar una carta en la cual indicaban que “voluntariamente” se acogía al mismo.

### **Respuesta de la Parte Demandada:**

Efectuadas las diligencias de notificación y traslado de la demanda, la **EMPRESA DE TRANSPORTE MASIVO DEL VALLE DE ABURRA LTDA.**, dio

respuesta a través de apoderada judicial<sup>1</sup>, aceptando el vínculo laboral con los demandantes; indicando que en ningún momento presionó o amenazó a los demandantes, para realizar el cambio de régimen de cesantías, sino que ofreció una bonificación, para quienes aceptaran el cambio; siendo un acuerdo libre de voluntades y de vicios para cambiar la forma de liquidar las cesantías; lo cual se hizo a futuro y sin desconocerles sus derechos adquiridos; liquidándose sus cesantías en el régimen retroactivo, hasta la fecha que optaron por el régimen anualizado. Agrega que los incentivos ofrecidos por su mandante no son ilícitos ni inconstitucionales y no existe norma que impida al empleador hacer ofrecimiento a sus trabajadores tendientes a negociar derechos laborales que no tienen el carácter de irrenunciables.

Se opuso a las pretensiones de la demanda y para su defensa formuló las excepciones de mérito que denominó: prescripción; buena fe e inexistencia de la obligación o del derecho.

### **Sentencia de Primera Instancia:**

**El Juzgado Diecinueve Laboral del Circuito de Medellín, absolvió a la Empresa de Transporte Masivo del Valle de Aburra Ltda. de todas las pretensiones formuladas en su contra por los demandantes Carlos Alberto Toro Henao, Rubén Darío Cataño Zapata, Carlos Edwin Terán Ramírez, José Libardo Hincapié Ospina y José Teodoro Gutiérrez Carmona; declarando probada la excepción de inexistencia de la obligación o del derecho propuesta por la demandada. Condenó en Costas a la parte actora; fijando las agencias en derecho en la suma de \$250.000,00 , a cargo de cada uno de los demandantes y en favor de la entidad accionada.**

---

<sup>1</sup> Folios 171 a 182 del expediente digital.

**Frente a la decisión anterior, ninguno de los apoderados de las partes formuló recurso de Apelación.**

**Alegatos de conclusión:**

**La apoderada de la Empresa de Transporte Masivo del Valle de Aburra Ltda.** reitera los argumentos esgrimidos en los alegatos de conclusión de Primera Instancia y solicita se confirme la decisión de Primera Instancia en todas sus partes.

Agotado el trámite procesal correspondiente a este tipo de procesos sin que se aprecie causal alguna de nulidad que invalide la actuación, se procede a resolver el asunto de fondo, previas las siguientes,

**CONSIDERACIONES**

**Se conoce del proceso en el grado Jurisdiccional de Consulta en favor de la parte parte demandante, al haberle sido adversa la decisión de Primera Instancia;** lo anterior, de conformidad con lo establecido en el artículo 69 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social.

**Conflicto Jurídico:**

**El conflicto jurídico a dirimir, radica en determinar si hay lugar a revocar la Sentencia de Primera Instancia, analizándose si existió vicios en el consentimiento los demandantes al aceptar cambiarse del régimen de cesantías retroactivas al anualizado, ofreciéndose el pago de un incentivo.**

**Encontrando esta Sala de Decisión Laboral procedente confirmar la Sentencia de Primera Instancia;** por las siguientes razones:

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 164 del Código General del Proceso, *“Toda decisión judicial debe fundarse en las pruebas regular y oportunamente allegadas al proceso.”*, de igual forma el artículo 167 ibidem, determina que *“Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen...”* normas estas aplicables por analogía al procedimiento laboral, las partes están obligadas a probar el supuesto de hecho de las normas jurídicas que consagran el derecho que reclaman; el no hacerlo conlleva inexorablemente a la negativa de éstos.

**Sobre el tema de la necesidad de la prueba, se ha pronunciado la H. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, en las Sentencias SL 2505 del 3 de julio de 2019, Radicado 63601; SL4032 del 1° de marzo de 2017, Radicado 43283 y del 22 de enero del año 2013, Radicado 37989;** indicando en la primera de las providencias, que *“...quien afirma una cosa es quien está obligado a probarla, obligando a quien pretende o demanda un derecho, que lo alegue y demuestre los hechos que lo gestan o aquellos en que se funda, desplazándose la carga de la prueba a la parte contraria cuando se opone o excepciona aduciendo en su defensa, hechos que requieren igualmente de su comprobación, debiendo desvirtuar la prueba que el actor haya aportado como soporte de los supuestos fácticos propios de la tutela jurídica efectiva del derecho reclamado» ...”*.

De lo anterior, se colige que las partes deben al interior de la actividad procesal asumir las cargas probatorias que le impone la ley que permitan al operador jurídico adquirir certeza para proferir una decisión, ya que la mera presentación de la demanda, de las excepciones o simplemente afirmar no constituye prueba.

En el asunto debatido se aduce por la parte actora que la entidad demandada presionó a los trabajadores y les condujo colectivamente a cambiarse del régimen de cesantías de retroactividad al régimen de cesantías anualizado, ofreciendo para tal fin una bonificación como incentivo, que era prohibido por la Ley, viciando con ello la libre voluntad de los trabajadores en el cambio de régimen. Lo anterior tiene su fundamento en lo consagrado en el artículo 13 de la Ley 344 de 1996, que en su texto original establecía:

*“Artículo 13. Sin perjuicio de los derechos convencionales, y lo estipulado en la Ley 91 de 1989, a partir de la publicación de la presente Ley, las personas que se vinculen a los Órganos y Entidades del Estado tendrán el siguiente régimen de cesantías:*

*a) El 31 de diciembre de cada año se hará la liquidación definitiva de cesantías por la anualidad o por la fracción correspondiente, sin perjuicio de la que deba efectuarse en fecha diferente por la terminación de la relación laboral;*

*b) Les serán aplicables las demás normas legales vigentes sobre cesantías, correspondientes al órgano o entidad al cual se vinculen que no sean contrarias a lo dispuesto en el literal a) del presente artículo.*

***El Gobierno Nacional podrá establecer programas de incentivos con la finalidad de propiciar que los servidores públicos que en el momento de la publicación de la presente Ley tengan régimen de cesantías con retroactividad, se acojan a lo dispuesto en el presente artículo.”*** (Negritas fuera del texto).

**El inciso final de la norma anterior, fue declarado inexecutable por la H. Corte Constitucional mediante la Sentencia C-428 de 1997**, argumentando que representa una autorización indeterminada, tanto desde el punto de vista material como desde el temporal, para que el Ejecutivo cumpla una función indudablemente legislativa, ya que corresponde al Congreso de la República de manera exclusiva establecer las rentas nacionales y fijar los gastos de la administración.

**Sobre la norma anterior y lo indicado por la Alta Corporación Constitucional, ya ha tenido oportunidad de pronunciarse la H. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, en las Sentencias SL 2241 del 28 de abril**

de 2021, Radicado 72983 y la SL 5078 del 12 de noviembre de 2019, Radicado 72970, en proceso similar adelantado en contra de la entidad aquí demandada, señalando que lo indicado por la H. Corte Constitucional no tiene incidencia en los casos en que las partes acuerdan, en el marco de una relación laboral subordinada entre un trabajador oficial y una empresa industrial y comercial del Estado, el traslado de régimen de cesantías a cambio de un incentivo económico, máxime que no se afectan derechos adquiridos, mínimos o irrenunciables del trabajador; lo anterior teniendo en cuenta que el aparte de la norma era inexecutable porque le permitía al Gobierno ejercer, sin límite alguno, tanto desde el punto de vista material como desde el temporal, una potestad reservada al legislador, cual es la de fijar los gastos de la administración, cuando ello es una función propia del órgano legislativo; y que ***“la misma Sentencia CC C-428-1997 legitimó la posibilidad de que el trabajador manifestara de manera libre y voluntaria acogerse a un nuevo régimen de cesantías, caso en el cual era dable mutar de la liquidación retroactiva a la anual”***. En la primera de las providencias, se indicó:

*“La Sala estima que la interpretación que realizó el ad quem respecto del entendimiento de la sentencia CC C-428-1997 no es contraria al ordenamiento jurídico y, por el contrario es acertada, pues en efecto, la Corte Constitucional consideró que la norma referida era inexecutable porque le permitía al Gobierno ejercer, sin límite alguno, tanto desde el punto de vista material como desde el temporal, una potestad reservada al legislador, cual es la de fijar los gastos de la administración, cuando ello es una función propia del órgano legislativo.*

*Pero lo anterior ninguna incidencia tiene en lo que ocurrió en este asunto, en el que las partes acordaron en el marco de una relación laboral subordinada entre un trabajador oficial y una empresa industrial y comercial del Estado, el traslado de régimen de cesantías a cambio de un incentivo económico, además que tal pacto no afectó los derechos adquiridos, mínimos o irrenunciables del trabajador pues solo versó sobre las cesantías futuras -según no se discute en casación- que, por no haberse causado, constituían una simple expectativa susceptible de negociación.*

*Además, es dable señalar que si bien el nuevo régimen de cesantías anualizado solo aplicaría para las relaciones laborales que nacieran con posterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 344 de 1996, tal y como lo ha precisado la Sala (CSJ SL17487-2015) -que no era el caso del actor pues quedó establecido el vínculo contractual inició el 1.º de diciembre de 1995-, nada se opone a que el trabajador manifieste su voluntad libre y consciente de beneficiarse del nuevo régimen anualizado de liquidación de cesantía. Menos aún, se reitera, cuando en este caso no se afectaron los derechos causados hasta la celebración del acto, no se alteró el derecho mínimo a que tal prestación se calcule conforme a la norma vigente y por su suscripción recibió un incentivo económico.*

**Téngase en cuenta que la misma sentencia CC C-428-1997 legitimó la posibilidad de que el trabajador manifestara de manera libre y voluntaria acogerse a un nuevo régimen de cesantías, caso en el cual era dable mutar de la liquidación retroactiva a la anual, tal y como ocurrió en el sub lite y no es objeto de controversia. Así lo expuso esa corporación:**

*En otras palabras, con la salvedad hecha sobre beneficios incontrovertibles para los trabajadores, los cambios que contemple la nueva legislación únicamente pueden hacerse obligatorios para las relaciones laborales futuras, es decir, las que se entablen después de haber entrado aquélla en pleno vigor, y, **en consecuencia, excepto el caso de anuencia expresa y enteramente voluntaria del trabajador afectado, no es admisible cobijar bajo las nuevas disposiciones las situaciones jurídicas nacidas a partir de vínculos de trabajo que se venían ejecutando al producirse la reforma.** Respecto de ellas, el único que puede optar por incorporarse al régimen posterior, pudiendo permanecer en el antiguo, es el empleado, libre de toda coacción externa y bajo el supuesto de su mejor conveniencia. (Subraya la Sala). ...” (Negritas fuera del texto).*

Conforme a lo precisado en la jurisprudencia anterior, el acordar un beneficio por cambio de régimen de cesantías no constituye, una trasgresión del libre consentimiento del trabajador, máxime en este caso que no se demostró lo afirmado por en los hechos de la demanda, esto es, que los demandantes fueron amenazados con el despido y cambio de condiciones laborales a quienes no aceptaran el cambio al régimen de cesantías anualizado, ya que no obra prueba documental o testimonial que de cuenta se hubiera ejercido fuerza, presión o coacción moral, psicológica y menos aún física por parte de la empresa Metro de Medellín Ltda. para que suscribieran los acuerdos, mediante las cuales cambiaron de régimen de cesantías, tal como acertadamente lo concluyó el Juez de Primera Instancia.

Además, la H. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral en las Sentencias SL 2874 del 17 de julio de 2019, Radicado 61609 y SL 3635 del 4 de septiembre de 2019, Radicado 60655, ha señalado que **la prueba de la presión, coacción o del constreñimiento, debe quedar plenamente demostrada y es carga probatoria del trabajador por ser quien la alega.**

Así las cosas, **esta Sala de Decisión Laboral confirmará en todas sus partes, la decisión de Primera Instancia, de la fecha y procedencia conocidas,**



**que vía de Consulta se revisa.**

### **COSTAS:**

**No se condenará en Costas en esta Segunda Instancia**, al haberse conocido el proceso en el grado jurisdiccional de Consulta, conforme a lo establecido en el artículo 365 del Código General del Proceso y el Acuerdo 10554 del 5 de agosto de 2016 expedido por el Consejo Superior de la Judicatura.

### **DECISIÓN:**

En mérito de lo expuesto, **EL TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN, SALA CUARTA DE DECISIÓN LABORAL**, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por Autoridad de la Ley,

### **RESUELVE**

**PRIMERO: Se CONFIRMA en todas sus partes** la Sentencia de Primera Instancia, de la fecha y procedencia conocidas, que por vía de Consulta se revisa, de conformidad con lo expuesto en la parte considerativa de esta Sentencia.

**SEGUNDO: No se CONDENA** en Costas en esta Segunda Instancia; según lo explicado en la parte considerativa.

**TERCERO:** Lo resuelto se notifica en **ESTADOS** (electrónicos de que

trata el artículo 9º del Decreto Legislativo 806 de 2020) y se ordena devolver el proceso al Despacho de origen. En constancia se firma el Acta por quienes en ella intervinieron.

**Los Magistrados,**



**MARÍA EUGENIA GÓMEZ VELÁSQUEZ**



**NANCY GUTIÉRREZ SALAZAR**



**CARLOS ALBERTO LEBRÚN MORALES**

**EL SUSCRITO SECRETARIO DEL TRIBUNAL  
SUPERIOR DE MEDELLÍN – SALA LABORAL -  
HACE CONSTAR**

Que la presente providencia se notificó por  
estados N ° 114 del 1º de julio de 2021

**consultable aquí:**

<https://www.ramajudicial.gov.co/web/tribunal-superior-de-medellin-sala-laboral/100>